



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL “DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON MENORES INFRACTORES POR CIBERDELITOS O USO INDEBIDO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA RELACIÓN, LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TRIC)”.

PRIMERA. INTRODUCCION

SEGUNDA. OBJETO

TERCERA. DURACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

1. Contenido del programa de intervención
2. Evaluación individualizada y aplicación del Programa: características de las actuaciones a desarrollar.
3. Evaluación de resultados: características de las acciones a desarrollar.

QUINTA. REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Recursos materiales para la prestación del servicio.
2. Régimen de funcionamiento del servicio.
3. Gastos inherentes a la prestación del servicio.
4. Medios personales.
5. Formación del personal.
6. Memorias e informes de ejecución.
7. Documentos e informes de los menores y jóvenes atendidos.

SEXTA. COORDINACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

SÉPTIMA. RELATIVOS A LA COLABORACIÓN MUTUA Y DIFUSIÓN. PROPIEDAD DE LOS MATERIALES TÉCNICOS

OCTAVA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

PRIMERA. INTRODUCCION

La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (en adelante la Agencia), tiene como fines la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores, así como desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a los fines de reinserción y educación derivados de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante LORPM), de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, (en



adelante RLORPM) y demás normas vigentes, complementarias y de desarrollo aplicables.

En concreto, el artículo 7 de LORPM define cuales son de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y las reglas generales de determinación de las mismas

Desde la Agencia se es consciente de que, por una parte, las personas adolescentes y jóvenes en la actualidad están absolutamente implicadas en las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (en adelante, TRIC) y, por otra, de que en el caso de menores y jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales, las infracciones de la ley cometidas han tenido en muchas ocasiones una relación directa con estas Tecnologías.

Nos encontramos, en este sentido, “ciberdelitos puros”, es decir, aquellos que únicamente pueden ocurrir en el ciberespacio, sin correspondencia en el espacio físico (estafas online, robo de identidad, secuestro informático...). En otras ocasiones, las TRIC han tenido una relevancia significativa en la comisión del delito o en los factores de riesgo asociados al mismo, constituyendo el contenido que se comunica o se transmite a través de internet el centro del ciberdelito (violencia de género, las amenazas o el acoso escolar, difusión de pornografía infantil...). Por último, en otros delitos, la Red se utiliza fundamentalmente para la preparación, organización, provocación o difusión del delito, posibilitando de forma relevante su contexto y desarrollo, como ocurre habitualmente en las actuaciones de grupos juveniles violentos o de radicalización. Además, son numerosas las ocasiones en que estos niveles de afectación cibernética se entremezclan.

Todo lo anterior justifica la atención a una problemática como la descrita a través del desarrollo y ejecución de un programa especializado.

SEGUNDA. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el desarrollo y ejecución, a partir de las líneas, objetivos y contenidos establecidos por la Agencia conforme al Anexo, de un programa de intervención específico, dirigido a los menores y jóvenes infractores por ciberdelitos o uso indebido de las TRIC y que, con arreglo a lo dispuesto en la LORPM se encuentren cumpliendo medida judicial en recursos de la Agencia.

TERCERA. DURACIÓN DEL CONTRATO.



La duración del contrato será de dos años, prorrogable por dos años más.

CUARTA. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

4.1. Contenido del programa de intervención

El programa de intervención objeto del contrato se articulará a través de dos vías fundamentales:

- 1) **Evaluación individualizada y aplicación del programa.** Se realizará una evaluación individualizada de los menores y jóvenes que hubieran cometido un ciberdelito o que presenten un uso indebido de las TRIC, determinándose, a partir de dicha evaluación, el nivel de aplicación del programa de intervención en función de los factores de riesgo recogidos y de la gravedad de la problemática presente en cada caso.
- 2) **Evaluación de resultados.** Se llevará a cabo la evaluación de resultados, a través del estudio y análisis de los casos atendidos, que permita valorar la eficacia del programa. Lo que facilitará las siguientes cuestiones:
 - Identificar las características específicas del perfil de menores y jóvenes infractores que presentan esta problemática.
 - Valorar los procedimientos terapéuticos e instrumentos técnicos empleados, con el objetivo de mejorar la sistematización y mejora de la intervención, así como la eficacia del tratamiento.

4.2. Evaluación individualizada y aplicación del Programa: características de las actuaciones a desarrollar.

Durante las fases de evaluación y aplicación del programa, la entidad adjudicataria pondrá en marcha las siguientes actuaciones:

- Estudio y valoración individual de los menores y jóvenes que cumplen medida judicial por ciberdelincuencia o que indiciariamente presenten problemática moderada o grave relacionada con un uso indebido de las TRIC, a partir de la valoración realizada por el equipo técnico que atiende el caso y por la Agencia.
- Establecimiento y ejecución del tipo de intervención a realizar (individual, grupal y/o familiar) de acuerdo con las necesidades y/o factores de riesgo detectados en cada



menor o joven atendido.

- Intervención con familias a través del grupo de familias o de forma individual según características y necesidades.
- Coordinación con el técnico de ejecución de la medida, para la adecuada aplicación del programa y el necesario establecimiento de cauces para el intercambio de información, así como para el seguimiento de cada uno de los casos.
- Asesoramiento especializado sobre la materia a los profesionales de los recursos asignados según necesidades.

4.3 . Evaluación de resultados: características de las acciones a desarrollar

La entidad adjudicataria llevará a cabo las siguientes actuaciones:

- Elaboración de un informe trimestral que recoja todas las actuaciones desarrolladas por la entidad adjudicataria en sus diferentes aspectos a lo largo de ese periodo de tiempo.
- Informe anual que recoja el tratamiento estadístico y análisis de los datos obtenidos a partir de criterios e instrumentos de recogida de información detallados y específicos, al objeto de conseguir que los resultados y conclusiones derivados del mismo reviertan en la mejora de la eficacia del programa.
- Presentación de informes como consecuencia de necesidades o incidencias puntuales cuando le sean requeridos.

QUINTA. REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

1. Recursos materiales para la prestación del servicio.

Las actividades objeto del contrato se realizarán en los recursos de la Agencia, que estarán dotadas de los espacios y mobiliario necesarios para la atención de los menores y jóvenes infractores en el desarrollo de las actuaciones y las actividades previstas.

En cualquier caso, la utilización por parte de la entidad adjudicataria de las citadas instalaciones tiene un mero carácter instrumental para la ejecución del contrato, quedando circunscrita a su vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno sobre



aquéllos, ni hacer uso de los mismos para otro fin distinto al previsto en el presente contrato

2. Régimen de funcionamiento del servicio.

2.1. En todo caso, la atención a los menores y jóvenes por parte del personal dependiente de la entidad adjudicataria deberá ajustarse a las prescripciones contenidas en la LORPM y en su RLORPM, así como en los reglamentos posteriores que las desarrollen, en especial las relativas a los derechos de los menores y jóvenes y a la exigencia de sus obligaciones, así como a las prescripciones que sean de aplicación contenidas en la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid y a lo contemplado en las normas internacionales, en lo que afecte a la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores.

2.2. El horario de atención a los menores y jóvenes será compatible con la organización del recurso y las propias actividades obligatorias de los menores. Preferentemente el programa tendrá horario de mañana y tarde de lunes a viernes sin perjuicio de que circunstancialmente se tenga que llevar a cabo alguna intervención por razón de la medida a cumplir u otros condicionantes en fines de semana.

2.3. La participación de los menores y jóvenes en el Programa, se ajustará a las directrices e instrucciones dictadas por la Agencia.

3. Gastos inherentes a la prestación del servicio.

La entidad adjudicataria se hará cargo de todos los gastos derivados del desarrollo del Programa, especialmente de aquellos que se vinculen a los profesionales de la entidad adjudicataria que lo impartan (equipamiento necesario o gastos de desplazamiento para la realización de las actividades programadas, entre otros).

4. Medios personales

4.1. La entidad adjudicataria deberá contar con dos técnicos titulados superiores especialistas (Grupo profesional 1, subgrupo 1 a, de conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo estatal vigente de reforma juvenil y protección de menores) que sean expertos en el tratamiento de la ciberdelincuencia y del uso indebido de las TRIC.

La jornada de trabajo será completa y abarcará 77 horas semanales (38,5 horas



semanales por técnico).

4.2. El personal que se adscriba al desarrollo y ejecución del contrato deberá contar con experiencia en la intervención terapéutica con menores y jóvenes que presenten una problemática asociada o derivada de conductas de riesgo a través de las TRIC.

4.3. Dicho personal dependerá exclusivamente de la entidad adjudicataria, la cual ejercerá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora, siendo la Agencia y, por extensión, la Administración de la Comunidad de Madrid, ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen.

4.4. Antes de la iniciación de los servicios, la entidad adjudicataria, deberá aportar, para su conformidad, al responsable del contrato designado por la Agencia, la relación y *currículum vitae* del personal destinado a la prestación del servicio, con indicación de jornada, titulación, cualificación y funciones, a efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos. Esta información se actualizará, de la misma manera, ante cualquier cambio o sustitución que se pretenda efectuar en el personal contratado para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

4.5. La notificación, respecto de incidencias del personal que afecten sustancialmente a la prestación del servicio, deberá facilitarse anticipadamente en el caso de que pueda preverse, y en el caso de que no hubiera podido realizarse tal previsión, en el plazo más corto posible, que no deberá superar una semana desde que se haya producido.

Las bajas y ausencias que se produzcan entre el personal deberán ser cubiertas a la mayor brevedad. En el supuesto de que sea una baja/ausencia que no se haya podido prever con antelación los trámites para la sustitución se iniciarán, como máximo, en los tres días siguientes debiendo quedar cubierta la baja en un plazo máxima de 15 días, justificando, ante la Agencia, los trámites efectuados.

4.6. Se procurará la estabilidad del personal durante la duración del servicio, no pudiendo sustituir al personal adscrito a la prestación del servicio objeto del contrato sin causa justificada.

4.7. De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 del IV Convenio Colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores, de 4 de febrero de 2021 (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de febrero de 2021), en el caso de que se produzca una cambio en la entidad adjudicataria del contrato administrativo, la nueva entidad



adjudicataria quedará subrogada en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores susceptibles de subrogación, de modo que deberá respetar lo establecido por dicho precepto.

4.8. Todo el personal adscrito a la ejecución del contrato habrá de contar con una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo apartado 3 del artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y de las condiciones generales de ejecución del servicio reflejadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sin perjuicio de las penalidades que puedan ser impuestas a la entidad adjudicataria de acuerdo con las especificaciones establecidas a tal efecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Formación del personal.

El adjudicatario garantizará y asumirá a su cargo el adecuado proceso de actualización y reciclaje del personal especializado encargado de la prestación del servicio. Por ello, se exigirá que cada una de las personas adscritas a la prestación del servicio realice al menos 20 horas de formación durante el periodo de ejecución del contrato, en materias relacionadas con la prestación del servicio. Igualmente, habrá de garantizar la formación de dicho personal en cuanto a las obligaciones correspondientes en materia de protección de datos de carácter personal.

6. Memorias e informes de ejecución.

6.1. La entidad adjudicataria presentará una memoria anual del funcionamiento del Programa, en la que consten las características de los usuarios atendidos, los programas y actividades llevadas a cabo y sus resultados, y cualquier otro aspecto relevante relativo a la prestación del servicio. Esta memoria recogerá también el análisis estadístico, así como su valoración y propuestas para la mejora del programa, tal y como se señala en la cláusula cuarta. En cualquier caso, elaborará también las memorias justificativas trimestrales en los que figuren las actuaciones desarrolladas por la entidad adjudicataria, así como los informes que, como consecuencia de necesidades o incidencias puntuales, le sean requeridos.

6.2. Asimismo, la entidad adjudicataria cumplimentará los soportes documentales establecidos por la Agencia.



7. Documentos e informes de los menores y jóvenes atendidos.

Todas las evaluaciones, incidencias e informes que sean elaborados por los profesionales adscritos a la ejecución del servicio y que se refieran a menores y jóvenes que estén cumpliendo una medida judicial, se incorporarán al expediente personal del menor custodiado por la Agencia y sólo tendrán acceso a los mismos los profesionales que deban intervenir en la ejecución de la medida.

Una vez finalizado el período de vigencia del contrato, los archivos de la entidad adjudicataria en que estén depositada la información imprescindible para la ejecución del Programa de intervención objeto de este contrato habrán de ser entregados de forma inmediata a la Agencia.

SEXTA. COORDINACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario del contrato designará un responsable del servicio quien coordinará y supervisará su prestación actuando como interlocutor ante la Agencia. Dicho responsable recibirá y ejecutará las indicaciones que la Agencia considere oportuno impartir en relación con la prestación del servicio y deberá tener atribuciones suficientes para adoptar, en su caso y al momento, las decisiones necesarias para asegurar el buen funcionamiento del mismo.

A este respecto, el coste de dicha figura no se considerará como gasto de personal y sí dentro del capítulo de gastos generales necesarios para el funcionamiento del servicio.

El adjudicatario, a través del responsable del Servicio, informará sobre la planificación del servicio, de la prestación realizada y, en su caso, sobre las incidencias producidas que surjan en el desarrollo y prestación del servicio, telefónicamente de manera inmediata o por cualquier otro medio que se considere pertinente u operativo, en el día en que se produzca, y a facilitar puntualmente cuanta información le sea requerida en relación con la misma.

Se calificará una incidencia como significativa siempre que produzca alteraciones en los medios exigidos que impidan prestar el servicio con normalidad, además de aquéllas que contemplen esta comunicación como norma dentro del oportuno protocolo de actuación.



Con el objeto de supervisar la correcta ejecución de las actuaciones objeto de este contrato, y ejercer el control sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos, la Agencia realizará actuaciones de seguimiento, supervisión y evaluación, estando el adjudicatario obligado a facilitar dichas facultades administrativas.

El adjudicatario del contrato se obliga a ejecutar las indicaciones de la Agencia en todos aquellos aspectos relacionados con los signos de identidad corporativa o institucional en la documentación y divulgación que se realice sobre las actividades y servicios que se prestan con cargo a este contrato.

En el caso de huelga, el adjudicatario deberá mantener puntualmente informada a la Agencia sobre la incidencia de la misma en la prestación del servicio. La Agencia podrá practicar las deducciones que procedan del importe a facturar por el adjudicatario en el periodo afectado, en función del grado de incumplimiento y la repercusión en la normal prestación de aquel.

La entidad adjudicataria deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil por los daños que pudieran sufrir cualesquiera personas, tanto terceros como los propios menores atendidos en el desarrollo de la actividad a realizar según lo establecido en el presente contrato, así como el personal de la entidad, en sí mismos o en sus bienes, incluidos los actos de los menores atendidos mientras se encuentren bajo la supervisión directa del personal de la entidad adjudicataria.

SÉPTIMA. COLABORACIÓN MUTUA Y DIFUSIÓN. PROPIEDAD DE LOS MATERIALES TÉCNICOS.

1. Ambas partes se comprometen a colaborar de manera activa en todos aquellos aspectos relacionados con la atención a menores o jóvenes en conflicto social, llevando a cabo intercambios de cuanta información, conocimientos y experiencia posean para la mejor atención de los menores o jóvenes y la adecuación de los recursos a las necesidades de cada momento.
2. También se comprometen a prestar la atención a los menores o jóvenes de acuerdo a criterios de excelencia y calidad, estableciendo estándares de calidad previamente consensuados y evaluando dicha calidad a través de métodos objetivos de reconocida eficacia.



3. El programa a desarrollar es de titularidad de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor por lo que corresponderá a esta la difusión, publicación de estudios o cualquier actuación llevada a cabo en el ámbito del presente contrato, sin perjuicio de que la entidad adjudicataria colabore en dichas acciones.

La elaboración y publicación de estudios o cualquier otro trabajo que el adjudicatario del contrato desee llevar a cabo utilizando información obtenida como consecuencia de la prestación del servicio, así como la difusión que se lleve a cabo de la actividad del Programa, necesitará la previa autorización de la Agencia.

La difusión del Programa o sus actividades ya sea a través de material impreso o de cualquier otro soporte divulgativo, deberá contar con el logo de la Agencia y de la Comunidad de Madrid, figurando la entidad adjudicataria de acuerdo con los cometidos que lleva a cabo en virtud del presente contrato y de la participación que haya tenido en el tema objeto de divulgación.

De otra parte, cuando el equipo técnico de la entidad adjudicataria encargado de la atención a los menores y jóvenes infractores, elaboren alguna publicación (o publiquen artículos en revistas científicas o de otro tipo), o participen con ponencias o comunicaciones en seminarios, congresos, jornadas, etc. en los que se traten temas relacionados con la atención prestada o con las actividades desarrolladas en el mismo, así como cuando organicen actos o eventos relacionados con el Programa y sus actividades, habrá de solicitarse la oportuna autorización a la Agencia, así como reseñar de un modo claro, visible y específico la vinculación del Programa y de su equipo con la Agencia mediante el presente contrato, así como la titularidad del mismo.

OCTAVA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para facilitar la evaluación de los programas y las posibles propuestas de mejora de las actuaciones, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará formada por dos representantes de la entidad adjudicataria y dos representantes de la Agencia, ejerciendo la presidencia la persona titular de la dirección-gerencia de la Agencia o la persona que ésta designe. Igualmente, designará al otro miembro de la comisión en representación de la Agencia.

Esta Comisión se reunirá cuantas veces sean necesarias para cumplir sus cometidos,



haciéndolo, al menos una vez al año. De cada reunión se levantará un acta con los asuntos tratados y los acuerdos alcanzados.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Normativa aplicable.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante, RGPD).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo que sea de aplicación.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Ley 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor.

La Agencia y la entidad adjudicataria declaran expresamente que conocen y quedan obligadas al cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia.

Responsabilidades sobre el tratamiento de datos personales

La entidad adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que se tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se hubiese dado dicho carácter por el órgano de contratación, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. En consecuencia, el adjudicatario habrá de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en la que se desarrollen sus actividades.

El adjudicatario tendrá prohibido el acceso a los datos personales que en cualquier soporte obren en las dependencias de la Administración a que pudiera tener acceso por razón de la prestación y que no estén directamente relacionados con la correcta



ejecución de la misma. En consecuencia, el adjudicatario deberá impartir las instrucciones precisas a su personal.

Para los casos en que la ejecución del contrato origine la comunicación por el adjudicatario a la Administración contratante de datos de carácter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de carácter personal, el adjudicatario se compromete a:

- No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas físicas interesadas, o, su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de licitud o bases de legitimación alternativas establecidas por el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
- Informar a las personas físicas a que se refieran los datos personales de todos los extremos que exige el artículo 14 del RGPD.
- Cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, así como con cualquier otra obligación que corresponda conforme a la normativa que, en cada momento, esté vigente en esta materia.

En caso de incumplimiento de las citadas obligaciones, el adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se le irroguen a la administración contratante, incluido el importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran serle impuestas.

Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA-GERENTE

Firmado digitalmente por: LOPEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
Fecha: 2025.09.02 14:30

Fdo.: **PILAR LÓPEZ GONZÁLEZ**

ANEXO – DIRECTRICES DEL PROGRAMA EDUCATIVO-TERAPÉUTICO PARA EL BUEN USO DE LAS TRIC Y EL TRATAMIENTO DEL CIBERDELITO

Actualmente, adolescentes y jóvenes están absolutamente implicados en las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC). Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2025) puede afirmarse que forman parte de la vida cotidiana de los menores y jóvenes españoles, no pudiendo entenderse la misma sin la presencia permanente de este elemento. Del análisis del perfil sociodemográfico de los internautas destaca que, de la población de menores entre 10 y 15 años, el 95,8% usaba ordenador, el 69,6% ha tenido a disposición un móvil en los últimos tres meses, y el 96,0% han sido usuarios de Internet en los últimos tres meses. Por otra parte, el 95 % de la población española de 16 a 24 años ha sido usuario diario de Internet.

Las características asociadas a las TRICs como son las respuestas rápidas, las recompensas inmediatas, la interactividad y el acceso a múltiples ventanas suponen un gran atractivo para los adolescentes (Echeburúa y De Corral, 2010). Estas mismas características incrementan tanto el riesgo de participar en actividades antisociales o delictivas a través de dispositivos electrónicos, como la vulnerabilidad de los menores a sufrir procesos de victimización. Distintos autores han definido una serie de aspectos en relación con estas herramientas que determinan elementos facilitadores del delito. Por ejemplo, Young (1997) establece cómo Internet proporciona anonimato, conveniencia y escape, estando asociado a su vez a una serie de refuerzos y mecanismos psicológicos como son las conductas adictivas, proporcionar apoyo social o satisfacción sexual, permite la creación de una personalidad ficticia, permite revelar aspectos ocultos de la personalidad o satisfacer la necesidad de reconocimiento y poder (Babín Vich, 2009). Por otro lado, Greenfield (1999) plantea el potencial adictivo de Internet que se relaciona con la velocidad, accesibilidad e intensidad de la información, suministrando en los casos de conducta adictiva una serie de sentimientos muy potentes como son el goce de intimidad, desinhibición, pérdida de ataduras, pérdida de la noción del tiempo, sentimiento de perder el control (Babín Vich, 2009).

La delincuencia juvenil es un fenómeno social que por su propia naturaleza evoluciona y se modifica de acuerdo con las características predominantes del entorno social del momento. Una de las particularidades es el uso de las *Tecnologías de la Relación, la Información y Comunicación* y su vinculación con la conducta antisocial o infractora. Pero como todo bien de consumo, en ocasiones se puede hacer un uso excesivo o inadecuado de este que puede derivar en la aparición de conductas de dependencia y/o antisociales. El presente programa pretende prevenir y abordar la **influencia que las tecnologías ejercen en la comisión de determinadas tipologías delictivas y/o en el aumento de ciertos comportamientos o características asociadas a la delincuencia juvenil**.

La Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPVI), aprobada en junio de 2021, también ha introducido valiosas aportaciones en esta línea, incluyendo la “violencia digital” en la definición del concepto de violencia:

“A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y

*bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente **la violencia digital**.*

*En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, **la pornografía infantil**, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, **el ciberacoso**, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, **el acceso no solicitado a pornografía**, la extorsión sexual, **la difusión pública de datos privados** así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.”*

Esta misma Ley, dedica el Capítulo VIII a las nuevas tecnologías, en el cual hace referencia al deber de las Administraciones Públicas de desarrollar actuaciones educativas y de sensibilización como la que se presenta en este Programa. En particular, el artículo 45 de la LOPIVI recoge que:

*“Las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización y difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores y otros profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, así como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el **ciberbullying**, el **grooming**, la **ciberviolencia de género** o el **sexting**, así como el **acceso y consumo de pornografía** entre la población menor de edad.”*

Los datos de la propia Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), a través del estudio de los hechos probados en sentencia y las diligencias policiales en el caso de las reparaciones extrajudiciales, presentan como más relevantes algunas nuevas formas de delincuencia en las que las TRICs aparecen como el medio exclusivo de comisión en el que se desarrollan determinadas conductas delictivas.

Estas nuevas formas de delincuencia relacionadas con el uso de las TRICs, denominadas “*delitos cibernéticos o ciberdelitos*”, se manifiestan de forma especial a través de una variedad de delitos tales como:

- *Estafas informáticas (phishing).*
- *Descubrimiento y revelación de secretos que afectan a la intimidad personal, familiar o a la propia imagen.*
- *Delitos contra el honor* relacionados con el uso inadecuado de las redes sociales cuando se lesiona el honor de la persona mediante injurias o calumnias con el agravante de darle publicidad a través de mensajes de chat o con publicaciones en redes sociales.
- *Ciberdelitos de índole sexual.*

- *Delitos de coacciones y amenazas en un marco online*, destacando los chantajes con imágenes comprometidas, las amenazas con su publicación si no se paga un dinero a cambio, y las coacciones a una víctima de forma reiterada, conocidas como *ciberstalking*.

En otros casos, la comisión del delito se acompaña de manera transversal con factores de riesgo asociados a otras problemáticas que requerirán su abordaje específico como son, por ejemplo, la violencia de género o las situaciones de acoso escolar tanto de forma individual como con participación grupal en las actuaciones. Por último, en otros delitos, su preparación, organización, provocación o difusión dan contenido de forma relevante al contexto y desarrollo del delito (grupos juveniles violentos, radicalización...).

La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, es conocedora de la necesidad de atender de forma específica esta situación, de forma preventiva con aquellos adolescentes y jóvenes que están cumpliendo una medida judicial y cuentan con factores de riesgo relacionados con un uso inadecuado de la TRIC's (prevención secundaria), y de forma más intensiva con los menores que cometen delitos a través de estos medios (prevención terciaria).

El desarrollo de un programa Educativo-Terapéutico para el buen uso de las TRIC's y el tratamiento del ciberdelito se basa en las competencias y fines asignados a la Agencia para la Reeducación y la Reinserción del Menor Infractor en su Ley de creación (Ley 3/2004, de 10 de diciembre) contemplándose en el art.2 que *"su objetivo básico es concentrar, desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a los fines de reinserción y educación derivados de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores"*.

1. OBJETIVOS

Las TRICs se han convertido en algunos casos en un ámbito generador de nuevas conductas delictivas (ciberdelitos puros); en otros, las Redes han facilitado conductas como la difusión o acceso a material o información ilícita (ciberdelitos de contenidos) y, por último, también han supuesto la réplica de delincuencias ya existentes pero realizadas a través del ámbito virtual (ciberdelitos réplica).

- Ciberdelitos puros: Se trata de un nuevo conjunto de delitos completamente nuevos que surgen del desarrollo de las TRICs, aquellos que únicamente pueden ocurrir en el ciberespacio y que no tienen correspondencia en el espacio físico (*phishing*, suplantación de identidad, secuestro informático, etc.).
- Ciberdelitos de contenidos: Los ciberataques de contenidos aglutinan a todas aquellas conductas en las que el centro de la infracción lo constituye el contenido que se comunica o se transmite a través de Internet (difusión de pornografía infantil, pornodifusión no consentida, *happy slapping*, etc.).
- Ciberdelitos réplica: el ataque no se realiza a un terminal informático, ni tampoco es el contenido el objeto de la ilicitud, sino que la Red es el nuevo medio a través del cual se comete una infracción que utilizaba anteriormente otros medios para llevarse a cabo. Se trata, por tanto, de réplicas de delitos físicos, llevados a cabo en el ciberespacio (amenazas, *ciberstalking*, *ciberbullying*, etc.).

Esta clasificación va a determinar los objetivos y contenidos de la intervención socioeducativa, ya que en aquellos en los que las TRIC's sean el nuevo medio a través del que se comete un delito ya existente, la finalidad de la intervención no estará solo en el aprendizaje de un buen uso de las TRIC's sino también en los factores de riesgo propios del delito que subyace, como es el caso del ciberbullying o la ciberviolencia de género.

1.1 Instrucciones para la aplicación del Programa

El Programa se configura a partir de diferentes bloques temáticos, transversales y complementarios, en función de las necesidades detectadas en cada menor, las exigencias de la medida judicial y/o el tiempo disponible para la intervención. El Programa se presenta para ser aplicado de manera íntegra o parcial, partiendo de una selección indicada de aquellos contenidos que respondan a la disminución de las necesidades criminógenas o factores de riesgo dinámico que motivaron el inicio/mantenimiento de la conducta infractora a través de las TRICs. Por lo tanto, debe realizarse la evaluación de cada menor, con el análisis pormenorizado de dichos factores y motivaciones asociados a la conducta problema.

De manera global, el Programa se desarrolla en tres Módulos con los objetivos generales que se especifican a continuación:

El contenido del “**Módulo A**” está pensado para ser aplicado con aquellos adolescentes y jóvenes que están cumpliendo una medida judicial y cuentan con factores de riesgo moderados o graves relacionados con un uso inadecuado de la TRIC (prevención secundaria); por otra parte, el “**Módulo B**”, se dirige a aquellos menores en los que la intervención viene motivada por la comisión de una infracción penal a través de las TRIC (prevención terciaria) junto con los contenidos que se valoren necesarios del Módulo anterior. Por último, el “**Módulo C**”, buenas prácticas asociadas al uso de las TRIC, es un módulo pensado para su desarrollo con todos los menores que participen en el Programa.

TABLA 1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y TERAPÉUTICO

MÓDULO A [PREVENCIÓN SECUNDARIA]: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE LAS TRICS.	MÓDULO B [PREVENCIÓN TERCIARIA]: REDUCCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL CIBERDELITO.
<ul style="list-style-type: none"> Tomar conciencia de los riesgos en el uso de las TRICs, así como de los posibles delitos y sus consecuencias. 	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir o erradicar los factores de riesgo asociados a la problemática del ciberdelito. Favorecer un proceso de motivación al cambio basado en el

<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir o erradicar los factores de riesgo asociados al uso inadecuado de las TRIC. • Trabajar la identificación de los potenciales riesgos del uso de las TRIC. 	uso responsable y crítico de las TRIC's.
<u>MÓDULO C (PREVENCIÓN DE RECAÍDAS):</u> BUENAS PRÁCTICAS ASOCIADAS AL USO DE LAS TRICS.	
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una actitud crítica y responsable hacia el buen uso de las TRICs. • Asumir buenas prácticas en el uso de dispositivos móviles y redes sociales. 	

2. PERFIL DE LOS MENORES RESPONSABLES DE CIBERDELITOS

Actualmente, las redes sociales tienen un papel importante en el desarrollo de la identidad de los adolescentes, donde el nivel de intimidad compartido en ellas es muy alto, actividades como colgar fotos personales, hacer publicaciones sobre el estado de ánimo, poner información personal, conocer nuevas personas, comentar las fotos de otros, mantener conversaciones íntimas en chats de las redes, etc. Todas estas formas de comunicación están generalizadas entre la población adolescente y juvenil y, por lo tanto, no resulta extraño que sean quienes más riesgos psicosociales sufren. Con el aumento y cotidianidad de estas prácticas, unida a su inmediatez y anonimato, el catálogo de comportamientos que pueden constituir una infracción aumenta cuantitativamente.

En los diferentes estudios e investigaciones se observa una banalización de la ciberdelincuencia por parte de menores y jóvenes, debido a que en muchas ocasiones la conducta DELICTIVA pasa inadvertida, fruto de la normalización de determinados comportamientos en la comunicación interpersonal que afectan a bien jurídicos como el honor, la intimidad y/o la libertad sexual de la víctima. Esto también se debe a la percepción de anonimato y la sensación de seguridad del infractor de poder ocultarse tras otros perfiles virtuales, diluyendo frenos de la motivación criminal como son el temor a ser identificados y detenidos.

En el ámbito de los menores y jóvenes infractores, el grueso de los ciberdelitos se encuentran dentro de la categoría “ciberdelitos réplica”, como las amenazas a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea; así como la categoría “ciberdelitos de contenidos”, en su mayoría la difusión de material de índole sexual o violento entre iguales (*happy slapping*).

Realizando una diferenciación por sexo, destaca el protagonismo que tienen las chicas en el delito denominado como “happy slapping”, que consiste en la grabación de una

agresión física a otro menor, que posteriormente se difunde y comparte a través de las redes sociales. En cuanto a los varones, resulta relevante el número de ciberviolencias sexuales en las que se ven implicados, siendo inexistente la presencia de mujeres asociadas a esta categoría delictiva. Entre los delitos de índole sexual que más se producen están la pornodifusión no consentida (*sexpreading* y pornovenganza) y la difusión de pornografía infantil.

En cuanto al rol que han ejercido los responsables de ciberacoso, se observa que muchos de ellos son o han sido víctimas previamente. Siguiendo los datos facilitados por el estudio de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia, aproximadamente la mitad de los adolescentes que sufren acoso escolar o ciberacoso también lo ejercen (UNICEF, 2021¹). Por tanto, además de intervenir educativamente con menores que han cometido un delito asociado a un uso problemático de las TRICs, también resulta imprescindible realizar programas preventivos que eviten futuras victimizaciones con el resto de menores que se encuentran cumpliendo una medida judicial.

A continuación, se realiza una clasificación de las ciberviolencias más frecuentes entre la población de menores infractores, en un sentido estrictamente descriptivo, ya que en el sentido normativo se aplican la nomenclatura correspondiente al Código Penal:

- **CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO:**

- **Cibercontrol.**
- **Ciberagresión verbal/emocional.**
- **Sextorsión.** Forma de extorsión sexual con que se amenaza a la víctima y se la chantajea con la difusión de imágenes comprometidas para obtener un beneficio.
- **Pornovenganza.** Fenómeno que se produce cuando una persona envía imágenes sexuales grabadas de su pareja o expareja a una página web, red social o aplicación de mensajería instantánea con el objetivo de vengarse/humillarla.
- **Amenazas.** Comunicar a la pareja o expareja un mal que sea delito respecto de su persona, su familia o su propiedad.
- **Vigilar las comunicaciones de la pareja.**
- **Exigir el envío de fotos, vídeos o audios,** en ocasiones incluso de material íntimo del/la menor (exigencia de prácticas de *sexting*). En algunas ocasiones estas exigencias se presentan como si fueran una demostración de cariño, o una prueba de confianza de la pareja, aunque esto no sea así.

- **CIBERVIOLENCIA SEXUAL:**

- **Difusión de pornografía infantil.** Difusión de material pornográfico infantil en grupos de whatsapp, etc. (*stickers, gifts...*).
- **Pornodifusión no consentida (*sexpreading*).** Compartir imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento. Se diferencia del porno

¹ Andrade, B., Guadix, I., Rial, A. y Suárez, F. (2021). Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades. Madrid: UNICEF España.

vengativo porque no está motivado por la venganza, y es una práctica diferente del *sexting* consentido y voluntario entre mayores de 16 años (intercambio de imágenes sexuales).

- **Tenencia de pornografía infantil.** Descargar, almacenar o poseer archivos de contenido erótico en los que aparezcan menores.
- **Sexting con menor de 16 años.** A través de las TRICS contacta con un menor de 16 años y le embauca para que le facilite material pornográfico.
- **Sextorsión.**
- **Morphing.** Uso de imágenes de personas menores de edad en situaciones normales de la vida cotidiana y transformarlas en contenido erótico/sexual.

- **CIBERACOSO ESCOLAR:**

- **Difusión de rumores crueles (*Dissing*).** un acosador difunde información cruel sobre su víctima, mediante publicaciones visibles en redes sociales o mensajes privados, con el objetivo de arruinar la reputación de esa persona o sus relaciones con otros.
- **Happy slapping.** Grabación de una agresión física, verbal o sexual a un menor, que se difunde y comparte a través de Internet. Esto puede ir desde el envío en un grupo de Whatsapp hasta su publicación en las redes sociales. Normalmente, el agresor físico y la persona que registra las imágenes tienen una intención previa de darle difusión al contenido grabado y quien graba no suele participar directamente en la agresión física.
- **Ciberagresión verbal/emocional.** Envío directo a través de chats o publicación de insultos o calumnias en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.
- **Suplantación de identidad.** El acosador o acosadores crean un perfil falso de la víctima en redes sociales y suben contenido humillante o información personal.

- **CIBERFRAUDE:**

- **Estafa.** Vendedores que prometen enviar un producto después de recibir el pago, pero nunca lo hacen.
- **Venta de objetos robados.** Venta de objetos robados previamente en plataformas de contraventa de productos.

- **OTRAS CIBERVIOLENCIAS ENTRE IGUALES:**

- **Happy slapping.** Grabación de una agresión física, verbal o sexual a un menor, que se difunde y comparte a través de Internet (incluida también en ciberacoso escolar, pero no se produce únicamente en ese contexto).
- **Amenazas.**
- **Coacciones.**
- **Ciberstalking.** Se trata de inundar a la víctima con mensajes e intentos de comunicación no deseada o consentida. Esto ocurre especialmente

en las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea o el correo electrónico.

- **Doxing.** Hace referencia a la publicación en línea de información privada en internet para exponer públicamente y avergonzar a la persona a quien se dirige.

3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES.

La participación de los menores en el Programa responde a una doble necesidad: [1] dar respuesta a las obligaciones y/o exigencias de la medida judicial como consecuencia del delito cometido; y [2] abordar situaciones de riesgo grave o muy grave de comportamientos antisociales a través de TRIC o de consumo adictivo sin sustancias protagonizadas por los menores (pantallas-internet, redes sociales, dispositivos electrónicos-; videojuegos y ciberjuegos; apuestas online; pornografía; ciberacoso).

Por tanto, la participación de los menores en el Programa responde al mandato judicial y/o la derivación de los profesionales de la Agencia tras realizar una detección de necesidades. La motivación de la derivación responderá a la presencia de indicadores de “riesgo alto” o “señales de alarma” asociadas al uso inadecuado de las TRIC’s por parte de los menores y jóvenes infractores, según protocolos establecidos.

4. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA.

Se trata de un programa flexible basado en los principios de Riesgo, Necesidad y Responsividad del *Modelo R-N-R* formulado por Andrews y Bonta (2010) que guían el ***Modelo General de Intervención con Menores Infractores de la Agencia de la CM para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor***. Desde esta perspectiva la intervención psicoeducativa para el buen uso de las TRIC y el tratamiento del ciberdelito ha de planificarse de manera individualizada atendiendo a:

- El nivel de riesgo presente en cada menor (*principio de riesgo*) cuantificado de forma objetiva y operativa, preferentemente a través de la Herramienta de Valoración del Riesgo y Gestión de la Intervención PREVI-A y HSP-J.
- Los factores de riesgo dinámicos, o necesidades criminógenas, directamente relacionados con la actividad delictiva como son los hábitos, las cogniciones o las actitudes delictivas, que se convertirán en los objetivos de tratamiento (*principio de necesidad*).
- La situación personal y capacidades de cada menor, tales como: el estilo de aprendizaje, motivación, habilidades y recursos personales (*principio de responsividad o capacidad de respuesta*).

De este modo, la planificación y secuenciación de las actuaciones psicoeducativas de este Programa Educativo-Terapéutico se ajustan de manera específica a las características, necesidades, motivaciones y evolución presentadas por cada menor.

El diseño del Programa permite la aplicación de los contenidos de trabajo de manera individual y/o grupal, así como el refuerzo en la asimilación a través de la participación del menor en otras actividades, transversales y complementarias, desarrolladas en los

diferentes recursos en coordinación con el responsable de la ejecución de la medida judicial.

Los profesionales que pueden desarrollar y llevar a cabo la intervención recogida en este programa pueden ser psicólogos o educadores sociales, todos ellos trabajadores habituales de los recursos, siendo el personal que lo aplique una figura de referencia estable para los menores y jóvenes.

5. CONTENIDOS.

Los tres Módulos que forman el Programa cuentan con diferentes contenidos en función de los objetivos generales y específicos correspondientes a cada uno de ellos. Los contenidos presentan un equilibrio entre la facilitación de información sobre las consecuencias negativas de los comportamientos de riesgo en Internet, la modificación de creencias y actitudes relacionados con un uso problemático de las TRICs y la mejora de las competencias personales e interpersonales.

A continuación, se presentan los Módulos, objetivos generales, objetivos específicos y contenidos de cada uno de ellos.

TABLA 2. MÓDULOS Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO-TERAPEUTICO

MÓDULO A. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE LAS TRICs	
OBJETIVOS GENERALES	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tomar conciencia de los riesgos en el uso de las TRIC, así como de los posibles delitos y sus consecuencias. ○ Disminuir o erradicar los factores de riesgo asociados al uso inadecuado de las TRIC. ○ Identificar los potenciales riesgos del uso de las TRIC. 	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Conocer los riesgos más comunes de la participación en redes sociales y aplicaciones móviles. • Identificar conductas en la Red asociadas a infracciones legales y sus consecuencias. • Reconocer conductas que puedan indicar una implicación con grupos organizados violentos, redes de trata y prostitución, la radicalización violenta o el extremismo. • Reconocer los mensajes de odio o que promueven la violencia en redes sociales. • Fomentar una actitud crítica y reflexiva sobre la información difundida/demandada a través de TRICs. • Resolver dilemas o situaciones de conflicto que se puedan encontrar en sus interacciones online. • Reforzar la capacidad para tomar decisiones responsables en la vida <i>online</i>. 	
CONTENIDOS	

- Identidad digital y reputación online. Redes Sociales.
 - Identidad digital: mi huella digital.
 - ¿Qué información forma parte de nuestra identidad digital?
 - La privacidad en Redes Sociales.
 - ¿Cómo construir una identidad *online* positiva?
- Espíritu crítico: Contrastar información de internet.
- Configurar la privacidad de las cuentas personales en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
- El árbol de decisiones: estrategias para la toma de decisiones en línea (¿publicar o no?, ¿aceptar amistad o no?, ¿compartir o no?, ¿reaccionar o no?).
- Respuestas alternativas a situaciones de conflicto en la Red.
- Prevención de Riesgos específicos asociados al uso inadecuado de las TRICs, relacionados con:
 - Violencia de género.
 - Ciberacoso escolar.
 - Suplantación de identidad.
 - Sextorsión.
 - Pornografía.
 - Apuestas y juegos online.
 - Trata y Prostitución (OnlyFans, Sugar Daddy, Sugar Baby...).
 - Discurso de odio.
 - Difusión de violencia *online*: *happy slapping*.

MÓDULO B. REDUCCION DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL CIBERDELITO

OBJETIVOS GENERALES

- Disminuir o erradicar los factores de riesgo asociados a la problemática del ciberdelito.
- Favorecer un proceso de motivación al cambio basado en el uso responsable y crítico de las TRIC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los antecedentes y el comportamiento violento asociados a la participación en ciberdelitos.
- Identificar las emociones implicadas en el ciberdelito.
- Reflexionar acerca de las creencias y estereotipos asociados a la conducta delictiva.
- Tomar conciencia de la narrativa construida en torno a la comisión de la conducta infractora.
- Identificar las fases del ciclo de la violencia *online* y sus diferentes actores.
- Identificar actitudes y mensajes *online* que apelan al miedo, o incitan a la hostilidad hacia los otros.
- Entender las consecuencias del ciberdelito para la víctima.
- Poner en práctica objetivos y metas incompatibles con el comportamiento antisocial/delictivo.

CONTENIDOS

- Identificar en qué estadio del cambio se encuentra del “Modelo Transteórico” desarrollado por Prochaska y DiClemente.
- Emociones y necesidades de los menores responsables de ciberdelitos.
 - Emociones y sentimientos implicados en los ciberdelitos: venganza, soledad, aburrimiento.
 - Necesidad de pertenencia y afirmación social.
 - Sensación de anonimato e impunidad.
 - Gestión de los enfados online: autocontrol.
- Creencias y estereotipos asociados a la conducta delictiva.
 - Analizar conductas ciberviolencias previas que no han supuesto apertura de expediente judicial.
 - Identificar justificaciones de conductas delictivas: Mecanismos de defensa.
 - Identificar creencias y estereotipos en relación a la conducta infractora (homofobia, perspectiva de género, etc.)
- Análisis funcional del comportamiento delictivo *online*.
- Empatía hacia la víctima: testimonios reales.
 - Víctimas de ciberdelitos sexuales.
 - Víctimas de ciberacoso escolar.
 - Víctimas de ciberviolencia entre iguales a través de las redes sociales.
- Motivación al cambio.
 - Identificar en qué estadio del cambio se encuentra tras la intervención socioeducativa (“Modelo Transteórico” desarrollado por Prochaska y DiClemente).
 - Poner en práctica objetivos y metas incompatibles con el comportamiento antisocial/delictivo.

MÓDULO C. BUENAS PRÁCTICAS ASOCIADAS AL USO DE LAS TRICS

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar una actitud crítica y responsable hacia el buen uso de las TRICs.
- Asumir buenas prácticas en el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover la importancia de fomentar la buena convivencia en la red.
- Aprender a bloquear y reportar tanto mensajes como usuarios con un uso inadecuado de las TRICs.
- Promover un uso adecuado de los espacios de entretenimiento online.
- Fomentar el respeto y la capacidad crítica en las comunicaciones en línea.
- Facilitar el desarrollo de redes de apoyo.
- Aprender a utilizar aplicaciones digitales para el desarrollo personal, laboral y/o formativo.

CONTENIDOS

- Riesgos asociados a la falta de netiqueta.
- Netiqueta para la ciberconvivencia.
 - Derechos y deberes en la Red.
 - Cibercomunicación respetuosa.
 - Respeto de tu privacidad y la de los demás.
 - Buenas prácticas como testigo de ciberacoso.
 - Tiempos y espacios para las TRICs.
- Aplicación práctica de las TRICs para mi desarrollo personal, laboral o formativo.